

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

FICHA 1.

OBJETO: *“Prestar a la Federación Colombiana de Municipios, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional, sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y contratación estatal, en temas relacionados con la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002.”*

Bogotá D.C, enero de 2020

TRABAJAMOS POR LA **D**ESCENTRALIZACIÓN, LA **G**OVERNABILIDAD, LA **A**UTONOMÍA LOCAL Y LA **P**AZ

Cra. 7 No. 74-56 - Piso 10, PBX: 57(1) 5934020 - Fax: 57 (1) 5934027
contactosimit@fcm.org.co - fcm@fcm.org.co - contacto@fcm.org.co - www.fcm.org.co - www.simit.org.co
Bogotá D.C. Colombia - Suramérica

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Federación Colombiana de Municipios es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho privado, organizada con base en la libertad de asociación prevista en el artículo 38 de la Constitución Política.

Por disposición del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, le ha sido asignada una función pública consistente en implementar y mantener actualizado el sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito – Simit.

Por la administración del sistema Simit, la Federación Colombiana de Municipios tiene derecho a percibir el 10% de cada recaudo que se efectúe a nivel nacional por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, y en razón al porcentaje asignado, la Federación Colombiana de Municipios se convierte en administrador de recursos públicos, cuya ejecución debe ajustarse al marco normativo vigente de la Constitución y la Ley, y reglas del presupuesto público.

El rol propio de la función pública que cumple la Federación Colombiana de Municipios a través de la Dirección Nacional Simit, y la gestión fiscal que debe realizar por administrar y manejar recursos públicos con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad, está sometido a la constante vigilancia por parte de la Contraloría General de la República y los demás entes de control.

En desarrollo de dicha función pública, cuyo fundamento constitucional se esgrime en el artículo 209 de la Carta Política, el Sistema Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito - Simit, con manejo de recursos públicos, se encuentra sometido a las normas propias del derecho público en cuanto a los regímenes de actos unilaterales, la contratación, los controles y la responsabilidad, los cuales son propios de las entidades estatales, siendo aplicable entonces para la presente contratación, los procedimientos contemplados en la Ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015.

Por ello, la Federación Colombiana de Municipios, en desarrollo de la función pública asignada y como administradora de recursos públicos, está autorizada para desarrollar actividades de carácter administrativo, gerencial y operativo que implican costos, gastos e inversiones permanentes.

Que dentro del ejercicio de planeación de la ejecución del recurso público, la Federación Colombiana de Municipios, ha adelantado mesas de trabajo con los diferentes grupos, para determinar el presupuesto a ejecutar en la presente vigencia, plasmando los bienes y servicios que serán objeto de contratación para satisfacer las necesidades de la función pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Federación Colombiana de Municipios, tiene planeado para la vigencia 2020, adelantar aproximadamente 70 procesos de selección, varios de ellos con objetos complejos, lo cual demanda del apoyo y asesoría especializada de un experto en contratación estatal, con experiencia en asesoría a entidades públicas, que apoye a la entidad en la etapa precontractual, contractual y post contractual, de los procesos de contratación, a fin de garantizar el cumplimiento y la aplicación de los postulados del Estatuto General de la Contratación y sus decretos reglamentarios.

Dicha asesoría especializada se requiere de manera permanente, por cuanto las actividades propias de la contratación estatal demandan conocimientos especializados en donde predomina el factor intelectual, atendiendo la gran responsabilidad que enmarca para la función pública, la adquisición de bienes y servicios que permitan su cumplimiento en términos de eficiencia, transparencia y los demás principios que enmarcan la actividad de contratación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha considerado procedente la contratación de una persona con experiencia y conocimientos en contratación estatal, debido a que, en la planta de personal de la entidad, no se cuenta con personal suficiente, con conocimientos especializados en materia de contratación de estatal, y el que existe no es suficiente para el actual requerimiento de la entidad.

Para satisfacer la necesidad de la entidad se requiere contratar los servicios profesionales de una persona natural o jurídica, que cuente con experiencia en el sector público, a fin de que preste en forma permanente, asesoría jurídica especializada en los procesos de selección que se adelanten en la Federación Colombiana de Municipios, y rinda los conceptos que le sean solicitados.

La oportunidad en la contratación que se planea efectuar, garantiza a la entidad poder contar de manera permanente con el apoyo especializado y la asesoría profesional e idónea en el análisis de problemáticas jurídicas, con la precisión conceptual necesaria mediante conocimientos actualizados y herramientas interpretativas adecuadas para abordar las distintas situaciones que se presenten en materia de contratación estatal, con la solvencia intelectual, acompañamiento y seguimiento continuo que se requiere en dichos procesos.

2. OBJETO A CONTRATAR

“Prestar a la Federación Colombiana de Municipios, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional, sus servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en derecho administrativo y contratación estatal, en temas relacionados con la función pública contenida en el artículo 10 de la Ley 769 de 2002.”

3. ALCANCE DEL OBJETO

No aplica para el presente proceso de contratación.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC

El objeto del presente proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios – UNSPSC así:

Clasificación UNSPSC	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Productos
80121704	Servicios	Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	Servicios legales	Servicios de responsabilidad civil	Servicios legales sobre contratos.

5. CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO:

No aplica para el presente proceso de contratación.

6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS:

Se requiere contar con los servicios profesionales de un abogado con amplia trayectoria académica y profesional en derecho administrativo y contratación estatal, con mínimo 3 años de experiencia comprobada, prestando sus servicios profesionales especializados en el sector público y que haya ejercido con buen crédito su profesión.

7. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es hasta por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L. (\$152.055.904)**, incluido IVA.

8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato será cancelado al contratista en doce (12) cuotas mes vencido, la primera por la suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$4.223.775)** y once cuotas iguales, sucesivas y vencidas cada una por valor de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L. (\$12.671.325)** incluido IVA.

El tipo de remuneración que se considera adecuado para este tipo de contrato desde la eficacia, eficiencia y economía del proceso de contratación, es un valor fijo mensual por concepto de honorarios profesionales, hasta finalizar el plazo pactado, atendiendo a que la prestación de servicios se realizará de forma permanente, en virtud del recurso público que administra la Federación Colombiana de Municipios, en virtud de la función pública designada por el legislador a través de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Por ello dentro de las obligaciones del contratista se impone la de presentar un informe mensual de actividades, que deberá ser verificado por el supervisor que sea designado por la entidad.

Este tipo de remuneración se encuentra acorde a las formas de pago que se han adoptado en contratos de esta misma naturaleza, no solo en la Federación Colombiana de Municipios, sino en otras entidades del estado, lo que indica que se encuentra dentro de las condiciones que permite el legislador y que se encuentran presentes en el sector.

Por ser un contrato de prestación de servicios profesionales que se ejecuta con plena autonomía administrativa y operacional, su cumplimiento se verifica únicamente frente a los productos entregados y las actividades ejecutadas en estricto cumplimiento de lo pactado.

En razón de lo anterior, la Federación concurrirá al pago de los honorarios que sean pactados, dentro de los treinta (30) días siguientes, previa presentación de informe mensual de actividades, de la factura, de la constancia del pago de aportes a seguridad social integral y el visto bueno e informe escrito del supervisor del contrato.

El supervisor designado deberá verificar y certificar en un informe escrito el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y dará su visto bueno para tramitar cada uno de los pagos.

El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales a que haya lugar de la vigencia fiscal del 2020.

9. NÚMERO DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para efectos presupuestales la Federación Colombiana de Municipios, cuenta con disponibilidad presupuestal N° 2020-00035 del 20 de enero de 2020, para atender el gasto que demande el contrato que se derive del presente proceso de contratación, con cargo al presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2020, por valor de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M.L. (\$152.055.904)**, expedido por la Secretaria General.

10. PLAZO

El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre supervisor y contratista y hasta el 30 de diciembre de 2020.

11. OBLIGACIONES

El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

GENERALES

1. Guardar absoluta reserva sobre toda la información y documentación de la cual llegará a tener conocimiento en cumplimiento de obligaciones asignadas.
2. Abstenerse de revelar, entregar o divulgar a terceros información, salvo autorización previa y expresa de LA FEDERACIÓN, durante la vigencia del presente contrato o después de la finalización de su ejecución, so pena de incurrir en las acciones legales pertinentes.
3. Presentar al supervisor, junto con el informe de actividades, la certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus empleados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, junto con cada factura.
4. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entramientos.

ESPECÍFICAS

1. Prestar asesoría jurídica de forma personal, virtual o telefónica requerida por la Federación Colombiana de Municipios, en el ámbito del derecho administrativo, particularmente en materia en contratación estatal de manera oportuna y completa.
2. Asesorar, apoyar y acompañar a la Federación Colombiana de Municipios- en cumplimiento de la función pública asignada, durante la etapa precontractual, contractual y post contractual de los procesos de selección que le sean consultados.
3. Emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados de forma verbal y/o escrita en materia de contratación estatal por la Federación Colombiana de Municipios, presentando recomendaciones y soluciones jurídicas a los casos y/o controversias planteados.
4. Asistir a las reuniones y audiencias que la entidad le solicite, y en las que se discutan asuntos relacionados con el derecho administrativo y la contratación estatal.
5. Apoyar en la proyección y revisión de documentos y actos administrativos requeridos por la Federación en materia derecho administrativo y de contratación estatal.
6. Sustanciar la defensa de los procesos judiciales y administrativos que llegasen a presentarse con ocasión a los temas que el contratista asesora o conceptúa.
7. Prestar acompañamiento y capacitación jurídica permanente a los funcionarios de la entidad en relación con el régimen de contratación estatal.
8. Las demás que le sean asignadas, siempre y cuando tengan relación con el objeto contractual y las exigencias legales.

OBLIGACIONES DE LA FEDERACIÓN

1. Pagar a EL CONTRATISTA el valor convenido en las fechas y forma establecida.
2. Entregar oportunamente o poner a disposición de EL CONTRATISTA los elementos, documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual.
3. Exigir a EL CONTRATISTA la calidad en los servicios prestados objeto del contrato.
4. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.
5. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

12. IDONEIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, en los procesos de contratación directa, no es necesaria la inscripción de los contratistas en el Registro Único de Proponentes.

Sin embargo, para efectos de esta contratación, la entidad verificará las condiciones del contratista a través de los siguientes documentos, que deberán ser aportados junto con la propuesta.

1. Cámara de Comercio.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
3. Fotocopia de la Libreta Militar del representante legal o certificación expedida por
4. autoridad competente donde se acredite que su situación militar se encuentra definida, en caso de que el representante legal sea hombre menor de cincuenta (50) años.
5. Copia del Registro Único Tributario –RUT, expedido por la DIAN, actualizado con las nuevas actividades económicas.
6. Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
7. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
8. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.
9. Certificado de antecedentes, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
10. Paz y Salvo por concepto de multas por infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia.
11. Hoja de vida de la función pública para personas jurídicas debidamente diligenciada.
12. Certificaciones de experiencia que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad.

Para efectos de la presente contratación, la Federación Colombiana de Municipios solicitó al doctor Jorge Pino Ricci, abogado especializado en Derecho Administrativo, con amplia experiencia como docente y asesor de diversas entidades públicas en temas relacionados con contratación estatal, allegar propuesta.

TRABAJAMOS POR LA DESCENTRALIZACIÓN, LA GOBERNABILIDAD, LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA PAZ

Conforme lo anterior, la entidad recibió propuesta suscrita por el representante legal de la sociedad PINO RICCI S.A.S, quien cuenta con experiencia propia en asesoría jurídica especializada en contratación estatal y quien además manifiesta que los servicios profesionales ofrecidos serán atendidos directamente y bajo responsabilidad del representante legal JORGE PINO RICCI y un equipo interdisciplinario de abogados pertenecientes al Despacho de reconocida idoneidad.

Que una vez analizada la experiencia aportada, por un lado la empresa PINO RICCI S.A.S cuenta con más de 3 años de experiencia asesorando a distintas entidades públicas en temas relacionados con derecho administrativo y contratación estatal tales como el Banco Agrario de Colombia, la alcaldía de Barrancabermeja, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; la Gobernación del Huila, la alcaldía de Pitalito.

Así mismo, el doctor Jorge Pino Ricci representante legal y único socio de la empresa PINO RICCI S.A.S, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional; tal como consta en su hoja de vida se ha desempeñado como asesor jurídico en temas de derecho administrativo y contratación estatal, en importantes entidades como el Ministerio de Defensa, Agencia Logística de las Fuerzas Militares de Colombia, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Dirección Nacional de Estupefacientes, Municipio de Fómeque, Municipio de Barrancabermeja, Coldeportes entre otras.

También, ha sido conferencista expositor en temas de Ley 80 y sus decretos reglamentarios en entidades como la Universidad Santo Tomás, Corporación Autónoma Regional del Dique, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Transporte del Nuevo Milenio – Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Instituto de Recreación y Deporte e ICETEX.

Adicionalmente a través del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, ha publicado los siguientes escritos:

- El régimen jurídico de los contratos estatales. Diciembre de 2005.
- La falla personal de los funcionarios públicos en el derecho de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia. 1990.
- Régimen de la Exorbitancia, las cláusulas obligatorias, multas y penal pecuniaria, publicado en Régimen de Contratación Estatal. 1996.
- Equilibrio Económico y Financiero del Contrato – escrito conjunto- publicado en Régimen de Contratación Estatal. 1996.

Así, una vez analizada la experiencia de la empresa PINO RICCI S.A.S, y del doctor Jorge Pino Ricci, la entidad determinó que es la persona idónea para prestar la asesoría especializada en el ámbito del derecho administrativo y en temas de contratación estatal, atendiendo a su formación académica como abogado especialista en derecho administrativo, y a su amplia experiencia profesional como docente y asesor en distintas entidades públicas y privadas del país.

Por lo ya señalado, tanto la empresa como el profesional ofertado por la empresa JORGE PINO RICCI S.A.S., es la persona idónea para ejecutar el contrato que pretende suscribirse para asesorar a la Federación Colombiana de Municipios, atendiendo a su amplia experiencia y gran trayectoria en los temas objeto del contrato.

13. SUPERVISIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un supervisor. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior y atendiendo el objeto del contrato, la Federación Colombiana de Municipios, establece que el perfil del supervisor del presente proceso de selección de contratación directa, debe ser un funcionario de planta, profesional de la Coordinación Jurídica que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.

Por esta razón, la vigilancia y supervisión del contrato será realizada por un profesional del Grupo Jurídico de la Federación Colombiana Municipios o quien designe el Director Ejecutivo, quien ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato y tendrá a su cargo entre otras funciones velar por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del mismo.

Igualmente será responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.

Atentamente,

Original firmado

JULIO ALFONSO PEÑUELA SALDAÑA

Coordinador Jurídico

Proyectó: Sandra Lucia Gómez Ruiz – Profesional del Grupo Jurídico

Revisó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Jurídico

Aprobó: Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Jurídico